



MODESTO ENRIQUE AGUILERA VIDES

Representante a la Cámara por el
Departamento del Atlántico

PROPOSICIÓN

Elimínese el Artículo 68 del texto propuesto para segundo debate al Proyecto de Ley Proyecto No. N° 369 de 2021 Cámara – 341 de 2020 Senado “Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones”

~~“ARTÍCULO 68. Adiciónese el artículo 221A a la Ley 599 de 2000 el cual quedará así:~~

~~ARTICULO 221A: INJURIA Y CALUMNIA CONTRA FUNCIONARIOS O EXFUNCIONARIOS PÚBLICOS: El que mediante injuria o calumnia debidamente comprobada pretenda atacar u obstruir las funciones constitucionales y legales de algún funcionario público, denunciando hechos falsos sobre él o sobre su familia, incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento veinte (120) meses y multa de trece punto treinta y tres (13.33) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin que sea procedente algún beneficio o subrogado penal.~~

~~Cuando quien profiera injuria o calumnia en contra de un funcionario o exfuncionario público o sobre su familia, sea representante legal o miembro de cualquier organización comunitaria, el juez de control de garantías ordenará a la autoridad competente que, previo el cumplimiento de los requisitos legales establecidos para ello, proceda a la suspensión o cancelación de la personería jurídica de la organización comunitaria a la que pertenece, en los mismos términos del artículo 91 de la Ley 906 de 2004”.~~

JUSTIFICACIÓN

La tendencia mundial y las recomendaciones del sistema interamericano de justicia se orientan a rechazar como ajustadas a las normas internacionales disposiciones de derecho interno que agravan la pena de los delitos por difamación cuando la víctima es un funcionario público.

En el mismo sentido la Corte Constitucional colombiana ha sido reiterativa en que los funcionarios públicos naturalmente están sometidos al escrutinio público a través de los medios de comunicación y las redes sociales y considera que este principio desarrolla adecuadamente el criterio de la prevalencia relativa de la libertad de información. En concordancia con esta línea jurisprudencial, no se deberían consagrar consecuencias punitivas más graves por la calidad de que la víctima sea un servidor público en relación con los demás ciudadanos.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Relatoría Especial para la libertad de expresión del año 2000) y otras instancias internacionales de derechos humanos han considerado incompatibles con el sistema internacional de derechos humanos, leyes que sancionan con mayor gravedad la difamación, injuria y calumnia cuando la parte ofendida es un funcionario público y ha instado a la derogatoria de tales leyes en los países en donde existen.

Atentamente,



MODESTO AGUILERA VIDES
Representantes a la Cámara
Departamento del Atlántico

MODESTO ENRIQUE AGUILERA VIDES
Representante a la Cámara por el
Departamento del Atlántico